

Índice de Noticias

SECTOR SOCIAL

• La Gaceta de los Negocios (31/10/2008)	39
• La Gaceta de los Negocios (31/10/2008)	39
• Diario de Jerez (25/10/2008)	30
• Diario de Sevilla (25/10/2008)	29
• Heraldo de Aragón (25/10/2008)	7
• Levante - El Mercantil Valenciano (24/10/2008)	21



Castilla y León unifica los criterios para acceder a los servicios sociales

FAMILIA

Los ciudadanos ya no tendrán que prescindir de beneficios dependiendo de la provincia en la que residan.

Eva Cárdbaba
Valladolid

CASTILLA y León ha dado un primer paso para unificar criterios y no malgastar esfuerzos en vano. El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de dicha comunidad, César Antón, ha firmado ya un convenio con las corporaciones locales de los Servicios Sociales que permitirá que todas las personas accedan a ellos en las mismas condiciones independientemente de la provincia en la que residan.

Entre las iniciativas en las que se trabajará de forma única se encuentran el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia, según fuentes de la Consejería de Familia. De lo que se trata, además, es "de intentar que las prestaciones de los servicios sociales básicos sean cada vez de mayor calidad y atender a los que más lo necesitan", manifestó el consejero César Antón.

Desde la Consejería de Igualdad de Oportunidades explican que con este acuerdo marco existirá una homogeneidad en el acceso unificado a los servicios sociales básicos pero, sobre todo, habrá unos criterios de valoración unificados con los de dependencia para

La ayuda a domicilio y la teleasistencia no serán diferentes dependiendo de la administración que las gestione



Los ciudadanos tendrán los mismos servicios sociales independientemente de la provincia en la que residan, gracias a un convenio gestionado por el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. I.CAL

que todo el mundo acceda a ellos en igualdad de condiciones. Además, el cambio de lugar de residencia no supondrá un cambio de baremos en las prestaciones que estuviera recibiendo esa persona en ese momento, un punto hasta ahora conflictivo y que, en algunos casos, hacía que se perdiera alguna de las ayudas conseguidas.

Desde la Junta de Castilla y León se ha comprometido a poner a disposición de las corporaciones locales un programa informático como garantía de homogeneidad en la gestión de las prestaciones.

Nuevas ayudas

La Administración regional recorrió cómo ha pasado de financiar con 62,7 millones de euros en 2006 (previa Ley de Dependencia) a los 95,9 millones en 2008 (56,5 millones de euros para el medio rural y 39,4 millones de euros para el urbano), lo que refleja que destinaron 30,7 millones más para servicios

El acuerdo suscrito por la Consejería de Familia permitirá que haya un baremo unificado con dependencia

sociales básicos y atención a la dependencia en tan sólo dos años, según los datos que maneja la administración regional.

Más empleo

Por lo que respecta al Servicio de Ayuda a Domicilio, en el presente ejercicio dará empleo a 4.900 personas; el 69,4% están en el ámbito rural y el 30,6% en el medio urbano. En general, durante 2008 el personal de este servicio ascendió a un total de 329 trabajadores más para atención a la dependencia que los que había en 2006 debido al desarrollo progresivo de esta ley. En cuanto a la aportación media del

presente ejercicio para el Servicio de Ayuda a Domicilio, desde la Junta de Castilla y León informan de que el usuario aporta un 11,3% frente al 88,7% de las administraciones públicas. Según refleja el informe de personas mayores del Imsero, en el Servicio de Ayuda a Domicilio, Castilla y León es superior a la media nacional en cobertura e intensidad horaria.

En el Servicio de Teleasistencia prevén ayudar a todo aquel que lo demande a lo largo de este año, con lo que garantizan este servicio a toda persona de más de 80 años que lo necesite.

Existen un total de 21.000 usuarios de este servicio en la comunidad y el perfil de estas personas dependientes es el de una mujer mayor de 65 años que reside en el medio rural.

www.gaceta.es

Para más información, consulte nuestra página web.



Antón demanda una Ley estatal homogénea para Dependencia

SOLIDARIDAD

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, sigue insistiendo en que la aplicación de la Ley de la Dependencia en España está siendo complicada y que se está produciendo a 17 velocidades, tantas como comunidades autónomas. El principal problema, según Antón, es que el Estado no haya garantizado la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones de los usuarios a través de una regulación estatal, homogénea y común.

El máximo responsable de esta cartera ya ha ofrecido al Estado "la experiencia de la Comunidad en la regulación temporal de la capacidad económica de los solicitantes de los servicios que recoge la ley".

Desde la Administración regional se critica que el coste de la aplicación en Castilla y León de la Ley de la Dependencia suponga un 80% a este Gobierno y los usuarios, pese a que el Ejecutivo central debería sufragar la misma cantidad que el autonómico.

Centros

En cuanto a la acreditación de centros y servicios, el consejero afirmó que la Junta está a favor de impulsar la calidad asistencial y en la atención en los servicios sociales. Recordó que Castilla y León tiene una norma que regula estas cuestiones e indicó que la memoria económica del Gobierno sólo recoge las partidas destinadas a sufragar las prestaciones de las personas dependientes.

Por último, reclamó financiación "específica, a mayores y adecuada" para no retraer fondos que sustentan las ayudas que reciben los usuarios. El consejero confió en que a pesar de ser "tarde", se logren avances sustanciales en esta materia para que la Ley de Dependencia pueda ser aplicada eficazmente en toda España.



Andalucía

ATENCIÓN SOCIAL Más de cien mil andaluces tienen ya reconocido el derecho a una prestación

¿Cuánto cuesta un dependiente?

La avalancha de solicitudes para acogerse a la Ley provoca que las administraciones tengan que duplicar las partidas iniciales • La fórmula del copago, a debate el martes



Varias personas mayores pasean por una calle del centro de Sevilla.

MELIBEA GARCÍA

A. Fuentes / SEVILLA

La Ley de Dependencia es cara, más de lo que se preveía cuando el Gobierno y todas las comunidades autónomas gestaban en 2006 el embrión de la norma destinada a consolidar el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Sin camino de retorno, las administraciones tienen que encontrar respuesta a las expectativas que la nueva ley generó en la ciudadanía y, tras más de año y medio en vigor, la demanda de mayor financiación estatal comienza a ser una bandera compartida por las administraciones.

La previsión de posibles beneficiarios recogida en el Libro Blanco sobre la Dependencia, que antecedió a la aprobación de la ley, ha resultado a todas luces insuficiente. En Andalucía, se prevían entre 36.000 y 42.000 grandes dependientes. A fecha 1 de octubre, 87.413 tienen reconocido el derecho a recibir una prestación de la ley al ser evaluados con el Grado III, el mayor nivel de dependencia. A ellos hay que sumar 16.942 dependientes severos (Grado II) que tienen derecho desde el 1 de enero de 2008. La cifra irá aumentando hasta 2015, cuando se complete el

desarrollo de la ley con todos los niveles de dependencia. A este paso, se queda corta la estimación de 260.000 andaluces.

¿Tienen recursos las comunidades para afrontar la demanda? Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ha repetido en numerosas ocasiones que están obligados por ley a dar cobertura, por lo que "si no se tienen, hay que buscarlos".

7

COMUNIDADES EN PROTESTA

Las regiones gobernadas por el PP, Navarra y Canarias se reúnen el lunes en Valencia para pedir más financiación

En 2007, la estimación inicial de 128 millones de euros se superó con creces. En el presente año, se consignaron 270 millones como partida inicial, un 110% más. Las arcas andaluzas ya han tenido que depositar el doble, más de 500 millones en estos diez primeros meses. En 2009 tienen que volver a aumentar al recibir a

nuevos demandantes, aún cuando la coyuntura económica no es la más propicia. La presentación de los presupuestos autonómicos la próxima semana despejará la incógnita, mientras desde el Ejecutivo se insiste en que se mantendrá el gasto en política social y no habrá recortes.

El esfuerzo debiera ser compartido con el Gobierno, según acordaron en las reuniones previas a la ley. ¿Cuánto ha aportado? A mediados de agosto, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte informó de que destinaba este año 241 millones de euros para todas las comunidades, de ellos 42,2 millones a Andalucía, un 16,4% más que el año anterior. Ésta es sólo una aportación inicial, ya que el Ministerio añade otra línea de financiación por persona atendida (sólo entre enero y mayo de 2008, esta financiación ascendió a más de 315 millones de euros).

La cuantía inicial satisface a la Junta, aseguraron fuentes del gobierno autonómico, al ser la primera en el ranking seguida de Cataluña (39,3 millones) y Madrid (27,5 millones), a la que se añadirá una cuantiosa financiación por las personas atendidas.

No tienen la misma opinión las

siete comunidades que el próximo lunes se reunirán en Valencia con el objetivo de crear un frente común para demandar más dinero al Gobierno. Los consejeros de La Rioja, Castilla y León, Madrid, Murcia, Valencia (todas ellas del PP), Navarra (UPN) y Canarias (Coalición Canaria) acordarán un documento para que se mejore la financiación que, al día siguiente, defenderán en la reunión que mantendrá el Gobierno con los responsables de todas las comunidades.

Entre las cuestiones más espinosas a tratar el martes, el copago, el coste que tendrán los servicios para los usuarios. Esta fórmula prevista en la aprobación de la Ley aún no se ha desarrollado y ahora cada comunidad cobra un distinto montante en función del servicio que presta.

El polémico borrador del Gobierno sobre el copago será de nuevo debatido. La consejera de Igualdad andaluza garantizó a primeros de mes que, en esta aportación del usuario, no se tendrá en cuenta la posesión de vivienda habitual como variable para pagar más, como manejó el Gobierno. El objetivo: resolver los números de la dependencia.



ATENCIÓN SOCIAL Más de cien mil andaluces tienen ya reconocido el derecho a una prestación

¿Cuánto cuesta un dependiente?

La avalancha de solicitudes para acogerse a la Ley provoca que las administraciones tengan que duplicar las partidas iniciales • La fórmula del copago, a debate el martes



Varias personas mayores pasean por una calle del centro de Sevilla.

MELIBA GARCÍA

A. Fuentes / SEVILLA

La Ley de Dependencia es cara, más de lo que se preveía cuando el Gobierno y todas las comunidades autónomas gestaban en 2006 el embrión de la norma destinada a consolidar el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Sin camino de retorno, las administraciones tienen que encontrar respuesta a las expectativas que la nueva ley generó en la ciudadanía y, tras más de año y medio en vigor, la demanda de mayor financiación estatal comienza a ser una bandera compartida por las administraciones.

La previsión de posibles beneficiarios recogida en el Libro Blanco sobre la Dependencia, que antecedió a la aprobación de la ley, ha resultado a todas luces insuficiente. En Andalucía, se prevían entre 36.000 y 42.000 grandes dependientes. A fecha 1 de octubre, 87.413 tienen reconocido el derecho a recibir una prestación de la ley al ser evaluados con el Grado III, el mayor nivel de dependencia. A ellos hay que sumar 16.942 dependientes severos (Grado II) que tienen derecho desde el 1 de enero de 2008. La cifra irá aumentando hasta 2015, cuando se complete el

desarrollo de la ley con todos los niveles de dependencia. A este paso, se queda corta la estimación de 260.000 andaluces.

¿Tienen recursos las comunidades para afrontar la demanda? Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ha repetido en numerosas ocasiones que están obligados por ley a dar cobertura, por lo que "si no se tienen, hay que buscarlos".

7

COMUNIDADES EN PROTESTA

Las regiones gobernadas por el PP, Navarra y Canarias se reúnen el lunes en Valencia para pedir más financiación

En 2007, la estimación inicial de 128 millones de euros se superó con creces. En el presente año, se consignaron 270 millones como partida inicial, un 110% más. Las arcas andaluzas ya han tenido que depositar el doble, más de 500 millones en estos diez primeros meses. En 2009 tienen que volver a aumentar al recibir a

nuevos demandantes, aún cuando la coyuntura económica no es la más propicia. La presentación de los presupuestos autonómicos la próxima semana despejará la incógnita, mientras desde el Ejecutivo se insiste en que se mantendrá el gasto en política social y no habrá recortes.

El esfuerzo debiera ser compartido con el Gobierno, según acordaron en las reuniones previas a la ley. ¿Cuánto ha aportado? A mediados de agosto, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte informó de que destinaba este año 241 millones de euros para todas las comunidades, de ellos 42,2 millones a Andalucía, un 16,4% más que el año anterior. Ésta es sólo una aportación inicial, ya que el Ministerio añade otra línea de financiación por persona atendida (sólo entre enero y mayo de 2008, esta financiación ascendió a más de 315 millones de euros).


La cuantía inicial satisface a la Junta, aseguraron fuentes del gobierno autonómico, al ser la primera en el ranking seguida de Cataluña (39,3 millones) y Madrid (27,5 millones), a la que se añadirá una cuantiosa financiación por las personas atendidas.

No tienen la misma opinión las

siete comunidades que el próximo lunes se reunirán en Valencia con el objetivo de crear un frente común para demandar más dinero al Gobierno. Los consejeros de La Rioja, Castilla y León, Madrid, Murcia, Valencia (todas ellas del PP), Navarra (UPN) y Canarias (Coalición Canaria) acordarán un documento para que se mejore la financiación que, al día siguiente, defenderán en la reunión que mantendrá el Gobierno con los responsables de todas las comunidades.

Entre las cuestiones más espinosas a tratar el martes, el copago, el coste que tendrán los servicios para los usuarios. Esta fórmula prevista en la aprobación de la Ley aún no se ha desarrollado y ahora cada comunidad cobra un distinto montante en función del servicio que presta.

El polémico borrador del Gobierno sobre el copago será de nuevo debatido. La consejera de Igualdad andaluza garantizó a primeros de mes que, en esta aportación del usuario, no se tendrá en cuenta la posesión de vivienda habitual como variable para pagar más, como manejó el Gobierno. El objetivo: resolver los números de la dependencia.

Tirada: 60.046	HERALDO DE ARAGON	Superficie: 633,00 cm²	
Difusión: 50.825 (O.J.D)			
Audiencia: 177.887 (E.G.M)	General	Valor: 2.515,03	
Ref: 2228432	1^a Edición	25/10/2008	Página: 7
			1 / 1

En primera persona | Encarnación Gómez es voluntaria de Cáritas en la parroquia de San Pablo de Zaragoza desde hace doce años



Encarnación Gómez ante el cartel de la sede de Cáritas Diocesana del paseo de Echegaray y Caballero. JOSÉ MIGUEL MARCO

“Entran por la puerta pidiendo trabajo, no dinero”

Aunque está acostumbrada a ver y oír de casi todo, Encarnación Gómez de 62 años, que lleva doce de voluntaria en Cáritas Parroquial de San Pablo de Zaragoza, todavía se es-

tremece cuando atiende a algunas de las familias que están llegando en los últimos meses.

“Entran por la puerta pidiendo trabajo, no dinero y eso ya dice mucho de ellos y sus necesida-

des”, relata desde su larga experiencia. Últimamente le ha impresionado un joven rumano, con mujer y dos hijos, que tras quedarse en paro en la construcción buscaba algún tipo de formación

para recolocarse en otro sector.

“Ellos lo pasan bien porque no tienen costumbre de pedir, hasta hace poco tenían su sueldo, y tú te sientes frustrada porque desearías tener ofertas de empleo para

todos”, explica. “Antes estaba acostumbrada a recibir a 18 o 20 personas cada día y desde el verano hasta aquí están llegando una media de cuarenta, es impresionante”, dice.

No ha percibido solo cómo crece el número de personas que entran en una situación de “vulnerabilidad” por sus apuros económicos. “Ahora también empiezan a acudir hombres, y más jóvenes, como cabezas de familia, cuando antes sobre todo eran mujeres”, añade en su particular análisis de la situación, basado en el día a día.

Cuando sus hijos se hicieron mayores, tiene tres, decidió dedicar su tiempo libre al barrio en el que nació: “Me acordé de que cuando yo he tenido problemas siempre me ha ayudado alguien y decidí hacer algo por el barrio en el que vi la vida y que conozco”.

Todos los miércoles por las tardes, salvo en los que trabaja, los dedica al centro de acogida. Muchas mañanas las pasa haciendo el seguimiento de alguna familia o acompañando a alguien que lo pide. Todo es bien recibido. Cuando se jubile asegura que no dudará en dedicar más horas a esta labor, compatibilizándola, eso sí, con el disfrute de sus nietos.

Aunque por su profesión como enfermera uno pudiera pensar que es capaz de ponerse una coraza ante la desgracia ajena, Encarnación Gómez confiesa que todavía le quita el sueño ver cómo la crisis se cebaba en los más frágiles. Ella forma parte de una importante red de voluntarios en la que muchos han encontrado una tabla de salvación.

S. CAMPO



POBREZA

La crisis deja a Cáritas sin presupuesto

El colectivo agotó en junio todo su previsión anual al aumentar la gravedad de los casos

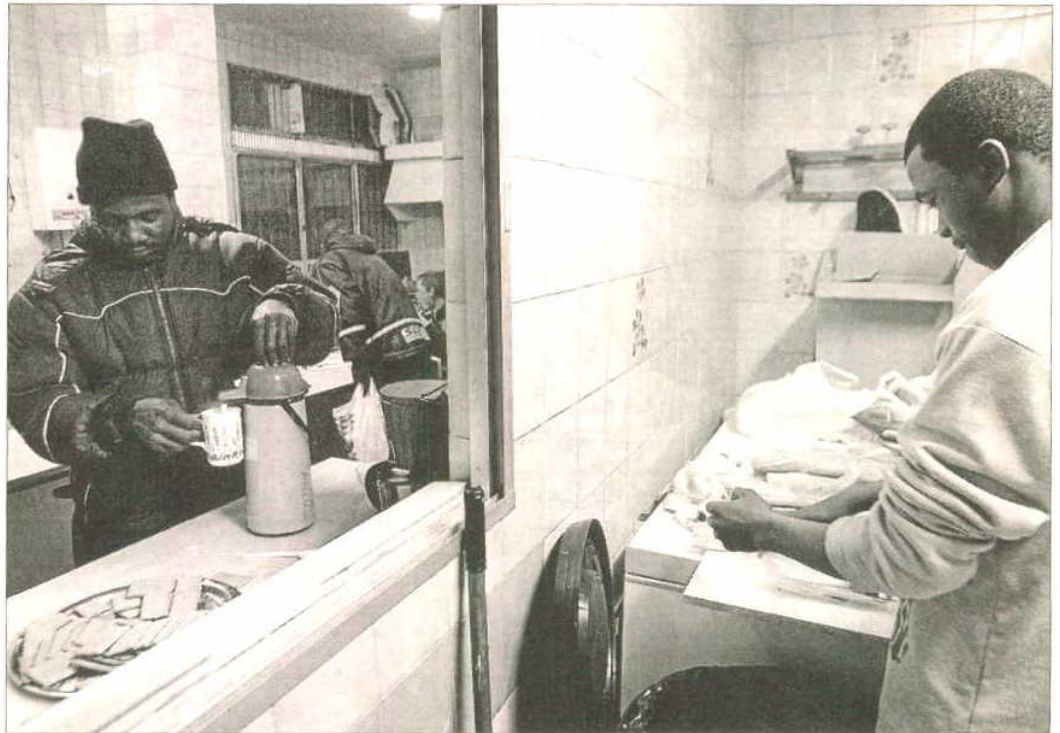
Levante-EMV, Valencia
Cáritas Diocesana de Valencia agotó el pasado mes de junio el dinero presupuestado para ayudas directas a través de su servicio de Acogida Diocesana. Así, entre enero y septiembre de 2008, la institución gastó 68.289 euros para cubrir las ayudas solicitadas, un 72,9 por ciento más que en todo el año 2007, según informó la entidad humanitaria en un comunicado.

El incremento en la concesión de ayudas se debe, en gran parte, a la mayor demanda de éstas, pero también a la mayor gravedad de las necesidades de las personas que la demandaban. En la Acogida Diocesana de Cáritas se atendió, entre enero y septiembre de 2008, a 470 personas más que en todo 2007. Además, el incremento de ayudas concedidas creció un 101,3 por ciento con respecto a 2007.

De estas ayudas, el 78,6 por ciento estuvieron destinadas a cubrir gastos relacionados con la vivienda –desahucios, pagos de alquiler o habitación o ayudas para el pago de recibos, entre otros–.

Tras el análisis de los datos aportados por el servicio de Acogida de Cáritas Diocesana de Valencia, destaca, además, que junto al incremento de peticiones de ayuda, las ayudas concedidas a lo largo de los nueve primeros meses de 2008 se duplicaron con respecto a todo el año pasado, pasando de 76 en todo 2007 a 153 en lo que va de 2008.

Asimismo, según las últimas memorias de Cáritas, el 89 por ciento de las personas que acudieron a la institución el año pa-



ALBERTO SAIZ

AYUDA. Centro de Cáritas donde ofrecen bocadillos y cafés a los inmigrantes sin recursos, en imagen de archivo

■ **La entidad ha duplicado las ayudas que concede y alerta de que está «desbordada» en gastos de alimentación**

sado eran inmigrantes, mientras que este año, la cifra ha ascendido hasta el 93,3 por ciento.

Del mismo modo, Cáritas ha tenido que responder a la petición de diversas Cáritas Parroquiales y economatos interparroquiales para cubrir gastos de

alimentación que, a causa del incremento de peticiones de ayuda, están «desbordadas» y han tenido que destinar fondos dirigidos a otros gastos sociales a cubrir las necesidades básicas de las personas que las demandan.

Llamamiento solidario

Cáritas ha hecho un llamamiento a la solidaridad para poder asumir el aumento de necesidades básicas y, a través de la donación económica, poder apoyar todas estas nuevas demandas.

También ha ofrecido colabo-

rar con la red de servicios sociales para coordinar y complementar las ayudas y ha pedido a la administración que refuerce las partidas económicas para paliar estas situaciones de extrema necesidad. Cáritas Diocesana prestó 38.000 atenciones durante 2007.

El «Informe de la Inclusión Social 2008» de Caixa Catalunya calcula que el 16,8% de la población de la Comunitat Valenciana vive bajo el umbral de la pobreza. Son 842.746 personas que sobreviven con un máximo de 567 euros al mes.